**JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE
HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN
JOSÉ, GOICOECHEA**

**RANDALL SEQUEIRA HERNANDEZ CONTRA COLEGIO DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE COSTA RICA**

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES PROVISIONALISIMAS

SE INICIA

Quien suscribe, **RANDALL SEQUEIRA HERNANDEZ**, cédula 1-0879-0628, casado una vez, administrador y abogado, en mi calidad de COLEGIADO DEL COLEGIO QUE SE DIRÁ, carné número 12691, interpongo el presente proceso de MEDIDAS CAUTELARES contra la Junta Directiva del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA, cédula jurídica 3-007-061080, en adelante el Colegio, representado por ENNIO ALBERTO RODRIGUEZ CESPEDES, cédula 1-0413-0983, casado, economista, vecino de San José y contra el TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNO del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA, en adelante el Tribunal, representado por RAYMOND CLAUDIO PERAZA RODRIGUEZ, cédula 1-1128-0909, casado, administrador, vecino de San José, en su condición de presidente del mismo tribunal, ambos órganos con domicilio evidente en Mercedes de Montes de Oca de San José, diagonal a la Rotonda La Bandera, edificio con rotulo al frente de cuatro pisos, con el siguiente fundamento de hecho y derecho:

HECHOS

PRIMERO: Que LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA a través de un correo electrónico con fecha 15 de noviembre del 2021 mediante un boletín adjunto, documento electrónico denominado “comunicado 21” del 15 de octubre de 2021, en adelante comunicado 21, dispuso comunicar a sus colegiados, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9866 del 18 de junio 2020, reformada por la ley 9956 del 24 de febrero del 2021, su

acuerdo de NO convocar la Asamblea General Ordinaria 2021, así como tener por prorrogados los nombramientos de la Junta Directiva, Fiscalía y Consejos Directivos de las Sedes Regionales según corresponda.

SEGUNDO: Que el **proceso de elecciones interno para el nombramiento** de nuevos miembros de la Junta Directiva y Fiscal del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y se realiza cada dos años y la misma se ejecuta de manera no presencial sino de forma virtual o electrónica por disposición de lo establecido así en su Ley Orgánica y el Reglamento de Elecciones, esta debe convocarse tanto por la Junta Directiva como por el Tribunal de Elecciones.

TERCERO: Que la JUNTA DIRECTIVA indica en su comunicado N. 21 que la posibilidad de la realización de una asamblea ordinaria virtual le resulta difícil de cumplir, dadas las limitaciones que tendrían los más de 45 mil colegiados de conectarse a dicha asamblea virtual y con esto garantizarse una comunicación continua sin interrupciones que den seguridad certera de la comprobación del cuórum antes de la votación y al final de esta, de tal manera que el quorum en ambos casos sea el mismo luego de contados los votos. A su vez indican en su comunicado N. 21 lo siguiente: *“Para celebrar la asamblea de modo presencial, el colegio debe cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, principalmente en cuanto al aforo máximo permitido y logística autorizada para la realización de las asambleas, así como los demás lineamientos vigentes. Todo ello impide la realización de la Asamblea General de forma presencial.”*

CUARTO: *Que el lugar en que se ha realizado siempre las asambleas generales del colegio es su auditorio. Que dicho auditorio tiene una capacidad a lo mas de recibir doscientas ochenta y nueve personas en tiempos normales (<https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/nuestras-instalaciones/sede-central/>),.Que con tal capacidad, y siguiendo la motivación del comunicado 21, entonces no sería viable realizar tampoco asambleas presenciales en tiempos normales, toda vez que sería imposible garantizarle el cupo a los más de cuarenta y cinco mil colegiados*

QUINTO: *Que en ninguna Asamblea general ordinaria o extraordinaria realizada por El colegio, el numero de asistentes supera las doscientas personas que participan siempre en segunda convocatoria, ya que es bien sabido que la mayoría abrumadora de colegiados no participa en tales asambleas.*

SEXTO. *Que el comunicado 21 de la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO no indica que el Ministerio de Salud cuenta desde el 06 de Noviembre del 2020 con el Lineamiento para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19 “LS-SI-025” pero lo omiten por un interés particular de la Junta Directiva para la no realización de elecciones y prorrogar su nombramiento en un claro acto de ilegalidad- Asimismo muchos Colegios Profesionales de este país han convocado a asambleas para elecciones de forma presencial, en este tiempo de pandemia. Por ejemplo los colegios de Agrónomos, el colegio de periodistas y el colegio de abogados y abogadas.*

SEPTIMO: *Que es especial el interés del presidente de la junta directiva en prorrogarse ya que no puede reelegirse en las próximas elecciones por haber sido nombrado por dos ocasiones consecutivas., en el puesto de presidente.*

OCTAVO: *Que a pesar de la pandemia sanitaria que se vive en el país, EL COLEGIO DISPONE del mecanismo electrónico para realizar las elecciones **para elegir y nombrar la nueva junta directiva y el fiscal** del COLEGIO. Que dicha elección y nombramiento es por medios electrónicos, no por Asamblea, sino por elecciones virtuales.*

NOVENO: *Que la Asamblea General Ordinaria que se realiza posteriormente a las elecciones **no es para nombrar** sino simplemente para ratificar el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano directivo y fiscal del Colegio, lo cual indica que los participantes solo tienen que levantar sus manos(o indicar de alguna otra forma o medio) en una asamblea presencial o virtual, para efectos de ratificar los nombramientos realizados durante las elecciones electrónicas.*

DECIMO: Que el agremiado al COLEGIO por regla obligatoria es un individuo altamente instruido-con diplomado universitario mínimo en el área de las ciencias económicas- en su mayoría, con experiencia previa en las elecciones virtuales y en uso de medios tecnológicos y capaz de participar en reuniones virtuales, así como participar en reuniones presenciales atendiendo los protocolos sanitarios.

DECIMO PRIMERO: Que el COLEGIO tiene experiencia en realizar reuniones virtuales educativas, sociales y para recibir nuevos colegiados (incorporaciones) con reuniones virtuales, que sobrepasan los trescientos participantes.

DECIMO SEGUNDO: Que actualmente la tecnología permite realizar reuniones virtuales hasta con mil participantes, lo cual es excesivo considerando la cantidad de personas que participan realmente en las asambleas, en segunda convocatoria. (Ver <https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362823-Organizaci%C3%B3n-de-reuniones-grandes.>)

DECIMO TERCERO: Que EL TRIBUNAL DE ELECCIONES DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA, el cual había sido nombrado por la misma Junta Directiva, estaba obligado a convocar a elecciones de nueva JUNTA DIRECTIVA y FISCAL, de dicho colegio durante la primera quincena de octubre del año 2021, según lo establece la ley y los reglamentos.

Que dicho TRIBUNAL no realizó dicha convocatoria en el tiempo establecido, sin ninguna justificación, ya que las elecciones son electrónicas siendo imposible la afectación de la salud pública y además porque no existe ninguna ley ni ningún reglamento que respalde la decisión de no llama a elecciones, es decir que al TRIBUNAL NO LE APLICA LA LEY 9866 Y SUS REFORMAS, no entendiéndose su comportamiento que resulta ilícito.

DECIMO CUARTO: Que ni el TRIBUNAL ni la JUNTA DIRECTIVA hicieron ningún intento, ni ningún esfuerzo, ni de realizar las elecciones ni la posterior asamblea general ordinaria para la ratificación de manera virtual o híbrida, entendida como parte presencial y parte electrónica de los nuevos miembros de Junta Directiva y Fiscal, para el periodo 2021-2023, como establece la ley Ley N.º

9866, artículo 3. Incluso no consideraron la posibilidad de una asamblea presencial, utilizando un lugar especial de convenciones, en el cual se puedan aplicar los protocolos del Ministerio de Salud y considerando que la Asamblea iba a tener menos de doscientos participantes.

DECIMO QUINTO: Que dicha no convocatoria solo beneficia a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA actual, que se están prorrogando, en aplicación superficial de la Ley N.º 9866 , ya que de manera injustificada o mal motivada o ilegal impide la realización de elecciones para nombrar los órganos ejecutivos y fiscal del colegio.

DECIMO SEXTO: Que la situación del COLEGIO no cumple con lo establecido por dicha ley N.º 9866 ya que definitivamente la selección y nombramiento de la junta directiva y del órgano fiscalizador no corresponde a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, sino a un proceso de elecciones que está establecido como electrónico por ley y reglamento. Que tal Asamblea no es para elegir y nombrar en ese acto los miembros de la Junta directiva y el fiscal. como ordena la ley 9866 sino simplemente para ratificarlos. Que además es evidente que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación puede realizarse por medios electrónicos o híbridos , sin que haya el TRIBUNAL realizado los esfuerzos a que está obligado para convocar y realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación. Que en consecuencia se deduce que el TRIBUNAL ELECCIONES y LA JUNTA DIRECTIVA debieron convocar a elecciones.

DECIMO SEPTIMO. Que por la no convocatoria a elecciones se violenta mi derecho constitucional y legal como miembro activo del COLEGIO a elegir y ser electo como miembro de la JUNTA DIRECTIVA Y DE LA FISCALIA del mismo colegio, por dos años, produciéndose un agravio imposible de reparar por mas que pasen los dos años.

DECIMO SEXTO: En el artículo 23 de la Ley N. 7105 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas con la reformas introducidas con la Ley N.º 9529 establece que habrá cada año una asamblea general ordinaria para conocer los

informes anuales y en el año que corresponda conocerá y ratificará la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva y fiscal, y en su artículo 26 establece que tendrá lugar una vez durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año; se sesionará en primera convocatoria con un cuórum de la mitad más uno de los miembros activos, y de no reunirse el cuórum señalado, se procederá a celebrar la asamblea en segunda convocatoria, válidamente, media hora después de la primera, en cuyo caso constituirán cuórum los miembros activos presentes. Sobre la convocatoria, el artículo 24 establece que las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por medio de una publicación en la página electrónica del Colegio, así como por los medios electrónicos que la Junta Directiva determine, o bien a juicio de este último órgano, se publicaran también dichas convocatorias en un diario de circulación nacional, y que, la publicación deberá hacerse con una anticipación no menor de diez días hábiles y deberán contener la agenda de temas a discutir, así como el sitio, el día y la hora de la reunión.

JUSTIFICACION FACTICA JURIDICA DE LA DEMANDA DE MEDIDAS INTERPUESTA.

La presente solicitud de medidas cautelares se fundamenta en los artículos 41 y 49 de la Constitución Política, y en los artículos 19, 20, 21, 22, 24, 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

El derecho fundamental a la justicia cautelar ha sido desarrollado en la jurisprudencia constitucional costarricense. Se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Política, tal y como ha quedado plasmado en la sentencia No. 2005-6224, de las quince horas con dieciséis minutos, del veinticinco de mayo del dos mil cinco, mediante la cual la Sala Constitucional dispuso:

“No puede existir una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela flexible y expedito (...) es menester señalar que el constituyente derivado, al reformar el artículo 49 de la Constitución Política, mediante la ley No.

3124, del veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y tres, concibió un control de legalidad de la función administrativa universal y plenario sin reductos externos de fiscalización, de modo que, incluso, los más exorbitantes privilegios administrativos sustanciales como por ejemplo, la ejecutoriedad del acto administrativo han quedado sujetos a tal control. Debe señalarse también que las medidas cautelares en los procesos asimétricos, como el contencioso administrativo en su condición legislativa actual, en los que existe un quebranto al principio de igualdad por no encontrarse las partes contendientes en una posición de igualdad, toda vez que la Administración Pública acude a éste, provista de prerrogativas sustanciales (v.gr. ejecutividad y ejecutoriedad el acto administrativo) y formales (v.gr. plazos fugases para interponer el proceso. Caducidad de la acción - el agotamiento preceptivo de la vía administrativa, etc.) Cumplen un papel de primer orden en su equilibrio y nivelación, resultando congruentes con el principio de la igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución Política)”

Además, la Sala Constitucional se ha ocupado de desarrollar la naturaleza jurídica y alcance de la tutela cautelar, como una manifestación del derecho constitucional de la justicia pronta y cumplida.

Como puede verse, en términos doctrinales y jurisprudenciales, es bien sabido, que la no imposición de medidas cautelares, en un alto número de casos, degenera en un verdadero fraude procesal, toda vez que el retraso del fallo provoca la negación misma del derecho por mucho que la sentencia procure lo contrario. De nada vale tener derecho si la protección de este derecho no es oportuna y real. De esta manera, la razón obtenida y otorgada finalmente, no debe verse menoscabada por la consumación de una conducta administrativa antijurídica.

La justicia, como bien sabemos, ha de ser pronta y cumplida, por eso, las medidas cautelares han encontrado arraigo en nuestro sistema jurídico, tal y como quedo

plasmado en la resolución de la Sala Constitucional antes citada. La siguiente cita, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expresa de manera muy completa, este principio cardinal del derecho:

“Las medidas cautelares como instituto procesal encuentran su fundamento en la propia Constitución Política y los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, en tanto que en dichos cuerpos normativos supra legales se prevé el acceso a la justicia efectiva como un derecho fundamental. En este orden de ideas, el artículo 41 señala al respecto lo siguiente: Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace referencia a la necesidad de que los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria efectividad para el reparo de los derechos constitucionales y legales en tanto dispuso en el artículo 8: ***“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”***

Así, para proteger de forma provisionalísima los derechos e intereses de mi representado y para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de una posible sentencia estimatoria, solicito medida cautelar provisionalísima ante causam inaudita altera parte, como un instrumento procesal pronto y provisional, tendiente a proteger y a garantizar el objeto de proceso (anular el acto de no convocar a elecciones ni la realización de la asamblea general ordinaria para su ratificación de nuevos miembros integrantes de la nueva junta directiva para el periodo 2021-2023) lo anterior de conformidad con el artículo 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

ANÁLISIS DEL LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

1.- FUMUS BONIS IURIS: De acuerdo con los artículos 21,22,23,24,25 y 29 de la Ley N. 7105 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas con la reformas introducidas con la Ley N.º 9529 los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y su fiscalía deben ser electos mediante un proceso de elección virtual y **ratificados** por la Asamblea General Ordinaria que por mandato legal debe celebrarse en la primera quincena del mes de noviembre de cada año cuando corresponda. Que para este año, 2021, el periodo de nombramiento de la actual junta directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y del Fiscal vence en noviembre.

Que el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica es un ente público no estatal, y por ende, integrante de la administración descentralizada. Los colegios profesionales son corporaciones de Derecho Público que ejercen una función administrativa, existe una delegación del poder público propia del Estado –vía ley- en los Colegios Profesionales, en virtud de la cual se encuentran facultados para ejercer potestades de imperio. Delegación de poder público que consiste en el control del ejercicio de la profesión, mediante la afiliación obligatoria y el poder disciplinario sobre sus agremiados, así como mediante el otorgamiento de poderes de auto-organización y auto-regulación, necesarios para el efectivo cumplimiento de sus objetivos. Por delegación expresa de la ley se crean los colegios profesionales y se les otorgan potestades de control y fiscalización sobre los colegiados, y que están sujetos al principio de legalidad.

Que el proceso de elecciones para el nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas se realiza cada dos años y la misma se **ejecuta de forma virtual**, establecido así en su Ley Orgánica y el Reglamento de Elecciones, siendo este año 2021 en la primera quincena del mes

de noviembre la elección de nuevos integrantes de junta directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica para el periodo 2021-2023.

Que la Asamblea General Ordinaria debe celebrarse en la primera quincena del mes de noviembre del 2021, en la misma se realiza la **ratificación** de los nuevos miembros de Junta Directiva para el periodo 2021-2023 producto de los resultados de un proceso de elecciones, mismo que por norma legal se realizan de forma virtual o electrónica, este proceso de elecciones de forma virtual o electrónica se ha implementado en periodos anteriores en la elección de nuevos miembros de juntas directivas, tal es el caso de la elección realizada para los miembros de junta directiva actual, que fue elegida en la primera quincena del mes de noviembre del 2019 para dirigir el Colegio de Ciencias Económicas en el periodo 2019-2021.

Que los miembros de Junta Directiva pueden mantenerse en el cargo únicamente por dos periodos consecutivos en un mismo puesto, tal es el ejemplo del actual Presidente de Junta Directa del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, que no podría darle continuidad a su mandato como presidente ya que acumula dos periodos consecutivos ostentando dicho puesto, pero si podría optar por otro puesto elegible de junta directiva mediante su participación en el proceso de elecciones virtuales a través de su postulación en otro puesto de elección que no sea la presidencia.

Que es la Junta Directiva junto con el Tribunal de Elecciones que deben convocar a elecciones de los nuevos integrantes de Junta Directiva para el periodo 2021-2023, esta convocatoria debe acordarse por lo menos **con un mes de antelación** a la fecha de elección, misma que debe realizarse en la primera quincena del mes de noviembre del año 2021.

La participación política es consustancial a la democracia. Esta requiere de la participación política de los ciudadanos. Por ello es fundamental el derecho de participación política, es decir del derecho efectivo de los ciudadanos de incidir en los acontecimientos políticos y, en general, en los asuntos públicos del país. Este

Derecho hace referencia a todas las acciones por medio de las cuales los ciudadanos intervienen en la selección de sus gobernantes y, de una manera directa o indirecta, participan en la formación o definición de las políticas públicas; en general, en la adopción de las decisiones fundamentales de la comunidad. Por consiguiente, es el derecho que permite al ciudadano ser coautor de la voluntad política y como tal miembro del poder público.

Que el **derecho de elegir y ser electo** corresponde a un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que no debe ser violentado, en este caso a todos los Colegiados debidamente incorporados y que desean postularse en un puesto elegible o elegir aquellos nuevos integrantes de la junta directiva del Colegio y fiscal.

Los derechos políticos corresponden exclusivamente a los ciudadanos y estos son los costarricenses mayores de dieciocho años. De lo que se deriva que la persona mayor de dieciocho años tiene el derecho de sufragio, establecido en el numeral 93 de la Constitución:

“ARTÍCULO 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

Ese derecho está consagrado también en disposiciones internacionales. Sobresale lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto ordena:

“Artículo 23 Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

De acuerdo con lo cual el derecho de participación está referido a todo asunto público y no se reduce al derecho a elegir y ser electo. Por el contrario, abarca la posibilidad de intervenir activamente en todo asunto público y el derecho de acceder a las funciones públicas, incluidas las que no son de elección popular.

En igual forma, el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos reconoce ese derecho:

“Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De conformidad con las normas de cita, la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas Colegio se integra por nueve miembros activos y una fiscalía elegidos en un proceso de elecciones mediante una votación de forma virtual, por un mandato de dos años permanecerán en sus funciones y podrán ser reelectos por un único período igual para el mismo cargo, de forma consecutiva o por los períodos que sea de forma alterna.

Que en la última Asamblea General Ordinaria realizada en fecha 15 de noviembre del 2019 para la ratificación de nuevos integrantes de la Junta Directiva para el periodo

2019-2021 asistieron una cantidad de 135 colegiados, esto según documento del acta de la Asamblea General Ordinaria 0112-2019, y esto ocurrió en tiempos normales, sin ninguna pandemia.

Que la Ley N. 7105, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas con las reformas introducidas con la Ley N.º 9529, establece que el mandato de los miembros de la Junta Directiva y su fiscalía dura dos años extinguiéndose al término de ese plazo.

Que el Ministerio de Salud mediante el Lineamiento **LS-SI-025** denominado **“Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19”** tiene como objetivo y campo de aplicación una serie criterios de índole sanitaria que permite **la realización** de Asambleas presenciales dentro de las cuales se encuentran las de Juntas Directivas de los Colegios Profesionales. Siempre y cuando cumplan dichos lineamientos no hay impedimento de no realizar dichas Asambleas de forma presencial.

Que la Ley N. 7105, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas con las reformas introducidas con la Ley N.º 9529 no ha previsto que, en el caso de no celebrarse la Asamblea General Ordinaria; sea por fuerza mayor o caso fortuito; se pueda, entonces, **prorrogar el nombramiento de los miembros cesantes de Junta Directiva**. Es decir que la ley en cita no ha previsto que se pueda aplicar, en relación con la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, nada análogo a lo que en otros ordenamientos jurídicos se conoce como el instituto jurídico de la Prorrogatio.

Tal como se manifestó de la descripción de los hechos supra, el acto configurado por el comunicado 21 de la Junta Directiva resulta violatorio de los principios constitucionalmente tutelados del sufragio, así como el derecho humano de elegir y ser electo; y constituye una acción **que causa perjuicio, no solo al suscrito sino también a** todos los más de 45 mil colegiados incorporados y que su interés sea participar en el proceso de elección de nuevos miembros de Junta Directiva y Fiscal

para el periodo 2021-2023 o elegir aquellos que consideren como nuevos miembros de Junta Directiva.

Así, se determina que, según lo estipulado en el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se justifica la imposición de una medida cautelar toda vez que la actuación referida por parte de la Junta Directiva, puede producir **“graves daños y perjuicios, actuales y potenciales”**, al no realizar un proceso de elecciones y la celebración de la asamblea general ordinaria para la ratificación de nuevos miembros de junta directiva y fiscalía, para el periodo 2021-2023, siendo los colegiados debidamente incorporados quienes se verán directamente afectados en **su derecho de elegir y ser electos**. Con vista de lo anterior, se determina que **la pretensión no es temeraria ni carente de seriedad, dado que es un acto que produce efectos y puede ser revisado en la vía judicial.**

Que, como ya se ha indicado en los hechos de esta demanda, LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA en su **comunicado 21**”, basándose supuestamente en la Ley 9866 del 18 de junio 2020, reformada por la ley 9956 del 24 de febrero del 2021, dispuso de NO convocar la Asamblea General Ordinaria 2021, así como tener por prorrogados los nombramientos de la Junta Directiva, Fiscalía y Consejos Directivos de las Sedes Regionales según corresponda.

Que la JUNTA DIRECTIVA indica en dicho comunicado que es imposible reunir los mas de 45 mil colegiados en una asamblea virtual y con esto garantizarse una comunicación continua sin interrupciones que den seguridad certera de la comprobación del quórum antes de la votación y al final de esta, de tal manera que el quorum en ambos casos sea el mismo luego de contados los votos. A su vez indican en su comunicado N. 21 lo que *para celebrar la asamblea de modo presencial, el colegio debe cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, principalmente en cuanto al aforo máximo permitido y logística autorizada para la realización de las asambleas, así como los demás lineamientos vigentes. Todo ello impide la realización de la Asamblea General de forma presencial.*

Que por lo tanto atendiendo a un criterio de proteger la salud pública es que no están convocando a elecciones y decide unilateralmente reelegirse que es lo mismo que prorrogarse en cada uno de los puestos, con lo cual violentan la ley del colegio y su reglamento.

Pero la argumentación anterior que forma parte de la motivación del acto administrativo, es falsa y es imposible de confrontar con los hechos reales que hemos propuesto al inicio de esta demanda, por lo siguiente:

Que el lugar en que se ha realizado siempre las asambleas generales del colegio es su auditorio. Que dicho auditorio tiene una capacidad a lo mas de recibir doscientas ochenta y nueve personas en tiempos normales (<https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/nuestras-instalaciones/sede-central/>),.Que con tal capacidad, y siguiendo la motivación del comunicado 21, entonces no sería viable realizar tampoco asambleas presenciales en tiempos normales, toda vez que sería imposible garantizarle el cupo a los más de cuarenta y cinco mil colegiados

Que en ninguna Asamblea general ordinaria o extraordinaria realizada por El colegio, el numero de asistentes supera las doscientas personas que participan siempre en segunda convocatoria, ya que es bien sabido que la mayoría abrumadora de colegiados no participa en tales asambleas.

*Que el comunicado 21 de la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO no indica que el Ministerio de Salud cuenta desde el 06 de Noviembre del 2020 con el Lineamiento para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19 “**LS-SI-025**” pero lo omiten por un interés particular de la Junta Directiva para la no realización de elecciones y prorrogar su nombramiento en un claro acto de ilegalidad- Asimismo muchos Colegios Profesionales de este país han convocado a asambleas para elecciones de forma presencial, en este tiempo de pandemia. Por ejemplo los colegios de Agrónomos, el colegio de periodistas y el colegio de abogados y abogadas.*

Que es especial el interés del presidente de la junta directiva en prorrogarse ya que no puede reelegirse en las próximas elecciones por haber sido nombrado por dos ocasiones consecutivas., en el puesto de presidente.

Que a pesar de la pandemia sanitaria que se vive en el país, EL COLEGIO DISPONE del mecanismo electrónico para realizar las elecciones **para elegir y nombrar la nueva junta directiva y el fiscal** del COLEGIO. Que dicha elección y nombramiento es por medios electrónicos, no por Asamblea, sino por elecciones virtuales.

Que la Asamblea General Ordinaria que se realiza posteriormente a las elecciones **no es para nombrar** sino simplemente para ratificar el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano directivo y fiscal del Colegio, lo cual indica que los participantes solo tienen que levantar sus manos(o indicar de alguna otra forma o medio) en una asamblea presencial o virtual, para efectos de ratificar los nombramientos realizados durante las elecciones electrónicas.

Que el agremiado al COLEGIO por regla obligatoria es un individuo altamente instruido-con diplomado universitario mínimo en el área de las ciencias económicas- en su mayoría, con experiencia previa en las elecciones virtuales y en uso de medios tecnológicos y capaz de participar en reuniones virtuales, así como participar en reuniones presenciales atendiendo los protocolos sanitarios.

Que el COLEGIO tiene experiencia en realizar reuniones virtuales tanto educativas como para recibir nuevos colegiados (incorporaciones) con reuniones que sobrepasan los trescientos participantes.

Que actualmente la tecnología permite realizar reuniones virtuales hasta con mil participantes, lo cual es excesivo considerando la cantidad de personas que participan realmente en las asambleas, en segunda convocatoria. (Ver <https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362823-Organizaci%C3%B3n-de-reuniones-grandes>)

Que EL TRIBUNAL DE ELECCIONES DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA, nombrado previamente por la Junta Directiva, estaba obligado a convocar a elecciones de nueva JUNTA DIRECTIVA y FISCAL, de dicho colegio durante la primera quincena de octubre del año 2021, según lo establece la ley y los reglamentos.

Que dicho TRIBUNAL no realizó dicha convocatoria en el tiempo establecido, sin ninguna justificación, ya que las elecciones son electrónicas siendo imposible la afectación de la salud pública y además porque no existe ninguna ley ni ningún reglamento que respalde la decisión de no llama a elecciones, es decir que al TRIBUNAL NO LE APLICA LA LEY 9866 Y SUS REFORMAS, no entendiéndose su comportamiento que resulta ilícito.

Que ni el TRIBUNAL ni la JUNTA DIRECTIVA hicieron ningún intento, ni ningún esfuerzo, ni de realizar las elecciones ni la posterior asamblea general ordinaria para la ratificación de manera virtual o híbrida, entendida como parte presencial y parte electrónica de los nuevos miembros de Junta Directiva y Fiscal, para el periodo 2021-2023, como establece la ley Ley N.º 9866, artículo 3.

Que dicha no convocatoria solo beneficia a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA actual, que se están prorrogando, en aplicación superficial de la Ley N.º 9866 , ya que de manera injustificada o mal motivada o ilegal impide la realización de elecciones para nombrar los órganos ejecutivos y fiscal del colegio.

Que la situación del COLEGIO no cumple con lo establecido por dicha ley N.º 9866 ya que definitivamente la selección y nombramiento de la junta directiva y del órgano fiscalizador no corresponde a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, sino a un proceso de elecciones que está establecido como electrónico por ley y reglamento. Que tal Asamblea no es para elegir y nombrar en ese acto los miembros de la Junta directiva y el fiscal. como ordena la ley 9866 sino simplemente para ratificarlos. Que además es evidente que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación puede realizarse por medios electrónicos o híbridos , sin que haya el TRIBUNAL

realizado los esfuerzos a que está obligado para convocar y realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación. Que en consecuencia se deduce que el TRIBUNAL ELECCIONES y LA JUNTA DIRECTIVA debieron convocar a elecciones.

Que por la no convocatoria a elecciones se violenta mi derecho constitucional y legal como miembro activo del COLEGIO, y de todos los colegiados a elegir y ser electo como miembro de la JUNTA DIRECTIVA Y DE LA FISCALIA del mismo colegio, por dos años, produciéndose un agravio imposible de reparar por más que pasen los dos años sin que definitivamente se haya probado que la realización de las elecciones y de la Asamblea General Ordinaria de ratificación puedan afectar la salud pública, como indicó el comunicado 21, que hemos descrito.

Por último y volviendo al principio, es evidente que la Ley N.º 9866 no impide al TRIBUNAL convocar a elecciones y a la JUNTA DRECTIVA saliente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica a convocar a la Asamblea General para la ratificación de los nuevos integrantes de la Junta Directiva para el periodo 2021-2023. Esto en el tanto los artículos 2 y 3 de la Ley N.º 9866 son claros en establecer que la prórroga prevista en su artículo 1, y las autorizaciones allí previstas, solo aplican en el supuesto de que el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica no haya podido o no pueda realizar aquella Asamblea General Ordinaria que permita el nombramiento de nuevos miembros de Junta Directiva, ya que lo que establece dicha ley N.º 9866 **no les aplica** como argumento legal, ya que lo que se realiza en la Asamblea General Ordinaria es la ratificación de los nuevos integrantes de Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y su fiscal **y no su nombramiento**, ya que este es derivado de los resultados de un proceso de elecciones que deben realizarse de forma virtual . En otras palabras que en la Asamblea no hay un proceso de elección y de votación como ocurre en muchas juntas directivas que no se encuentran sujetas al derecho público y en el cual la ley estableció un proceso electoral virtual, como es el caso del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA.

2- **PERICULUM IN MORA:** La presente solicitud cautelar de suspender el acto administrativo dictado por la Junta Directiva del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS, en su comunicado número 21 del 15 de octubre de 2021, en el que determina la NO realización del proceso de elecciones para de nuevos miembros de su Junta Directiva y fiscal para el periodo 2021-2023 , así como la NO realización de la Asamblea General Ordinaria con el fin de la ratificación de dichos nuevos miembros, genera un **perjuicio grave e irreparable** para todos los Colegiados debidamente incorporados que desean participar en el proceso de elecciones con el fin de elegir y ser electos, pero también para el Colegio que represento, toda vez que se nos limita el derecho constitucional y un derecho humano al sufragio inherente a un país como Costa Rica donde nos rige la democracia y no la implementación de una dictadura que se nos quiere imponer a través de las actuaciones ilegales de la Junta Directiva en prorrogar su nombramiento.

Como sabemos el proceso judicial resulta por diferentes razones de una duración tal que impide el derecho de los demandantes a tener resuelto el asunto de manera pronta y cumplida. De tal manera que no queda ninguna duda, de que el período de dos años que implica la prórroga de la junta directiva y de la fiscalía del colegio es insuficiente para resolver el conflicto, lo cual significa que si la medida cautelar no es impuesta como será solicitada, LA JUNTA ACTUAL Y EL FISCAL TERMINARAN EL MANDATO sin que haya terminado el juicio contra el acto administrativo que los colocó en tal situación de poder.

Esto es irreparable, porque estarán en el poder independientemente de que hayan sido demandados y eso significa que durante esos dos años se violentará día a día el derecho al sufragio del suscrito y demás colegiados, sin que el daño sea económico y sin que sea posible por algún medio de medir dicho daño,

Y por lo tanto de no aplicarse la medida cautelar el daño causado contra la dignidad humana es de imposible reparación, ya que no habría la cantidad de dinero que pudiera compensar un derecho fundamental como el que está siendo evidentemente dañado.

O sea que la estimación de costos de la resolución 21 del colegio es imposible pero al mismo tiempo se puede concluir que es infinita por cuanto el daño es contra la dignidad humana.

La pregunta cuanto vale la vida humana, cuánto vale la libertad o cuanto vale el derecho a votar y a ser electo es incontestable en términos económicos, pero la existencia del valor de la vida y de la libertad y del derecho al voto no puede estar en duda, y si esto se hiciera sería una grave deshonra para el sistema judicial en un país que ha aprobado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos.

3.-PONDERACION DE LOS INTERESES: Dos intereses se encuentran en juego con claridad en el presente asunto, por una parte el derecho al voto o al sufragio dentro del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA y por otra parte el derecho a la salud de los mismos agremiados a dicho colegio y la salud pública. O sea que la Junta Directiva y el Tribunal de elecciones del Colegio estarían protegiendo el derecho a la salud por lo cual sería válido violentar el derecho al sufragio. Por lo tanto ambos intereses, que resultan ser derechos humanos, deben de ser confrontados.

El derecho al sufragio versus el derecho a la salud

Tal y como se ha indicado en los puntos anteriores, la actuación de la Junta Directiva al no realizar el proceso de elecciones de nuevos miembros de Junta Directiva para el periodo 2021-2023 y la realización de la Asamblea General Ordinaria para la ratificación de dichos nombramientos sino aplicar una prórroga de su nombramiento le causaría un grave perjuicio al suscrito y a todos los colegiados que están debidamente incorporados, ya que no tendrían la posibilidad de proponer su nombre a elección o a su vez elegir aquel grupo de colegiados de su interés; y por la otra parte al Colegio que represento toda vez que la actuación impugnada viene en detrimento del prestigio de un Colegio Profesional de vital importancia para el país, ya que su actuaciones han tornado en negatoria la realización de un proceso de

elecciones transparente y democrático evitando el sufragio de todos sus colegiados y en detrimento del derecho de elegir y ser electos.

Los colegiados se verán severamente perjudicados al no poder participar en un proceso electoral, teniendo que soportar una Junta Directiva que se arroja potestades contrarias a Derecho ya que no se ajustan a los principios de la legalidad, ni constitucionales y pone en riesgo la correcta orientación que deben de recibir los colegiados en su derecho al sufragio. Proceder con la realización de un proceso de elecciones y ratificación de nuevos miembros de junta directiva para el periodo 2021-2023 resulta más beneficioso para los intereses públicos, pues es de esperar que con la cantidad de colegiados debidamente incorporados (más de 45.000 mil colegiados debidamente incorporados a la fecha), se logren postular profesionales de grandes capacidades y preparación académica para desempeñar las labores propias del cargo.

Por otra parte, el interés de la parte actora no es un nombramiento en la Junta Directiva para el periodo 2021-2023, sino que procura a través de la realización de un proceso de elecciones virtual transparente y democrático con su ratificación en la asamblea general ordinaria, la participación de todos aquellos colegiados debidamente incorporados que tengan interés en su derecho de elegir y ser electos, inclusive los actuales miembros que conforman la junta directiva no tendrían impedimento de participar y ser reelectos, eso sí por un único período igual para el mismo cargo, o de forma consecutiva o por los períodos que sea de forma alterna. Tal y como lo demuestran los hechos de la presente demanda no existe ninguna posibilidad de que por realizar la Asamblea para la ratificación de los nuevos miembros de la JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL del COLEGIO, se vea comprometida la salud.

De los hechos se deduce que la ASAMBLEA se puede realizar de manera virtual o híbrida sin que necesariamente se perjudique la salud de algún agremiado o de la salud pública. Y esto por lo siguiente:

Que la JUNTA DIRECTIVA indica en dicho comunicado que es imposible reunir los mas de 45 mil colegiados en una asamblea virtual y con esto garantizarse una

comunicación continua sin interrupciones que den seguridad certera de la comprobación del quórum antes de la votación y al final de esta, de tal manera que el quorum en ambos casos sea el mismo luego de contados los votos. A su vez indican en su comunicado N. 21 lo que *para celebrar la asamblea de modo presencial, el colegio debe cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, principalmente en cuanto al aforo máximo permitido y logística autorizada para la realización de las asambleas, así como los demás lineamientos vigentes. Todo ello impide la realización de la Asamblea General de forma presencial.*

Que por lo tanto atendiendo a un criterio de proteger la salud pública es que no están convocando a elecciones y decide unilateralmente reelegirse que es lo mismo que prorrogarse en cada uno de los puestos, con lo cual violentan la ley del colegio y su reglamento.

Pero la argumentación anterior que forma parte de la motivación del acto administrativo, es falsa y es imposible de confrontar con los hechos reales que hemos propuesto al inicio de esta demanda, por lo siguiente:

Que el lugar en que se ha realizado siempre las asambleas generales del colegio es su auditorio. Que dicho auditorio tiene una capacidad a lo mas de recibir doscientas ochenta y nueve personas en tiempos normales (<https://www.colegiocienciaseconomicas.cr/nuestras-instalaciones/sede-central/>), Que con tal capacidad, y siguiendo la motivación del comunicado 21, entonces no sería viable realizar tampoco asambleas presenciales en tiempos normales, toda vez que sería imposible garantizarle el cupo a los más de cuarenta y cinco mil colegiados

Que en ninguna Asamblea general ordinaria o extraordinaria realizada por El colegio, el numero de asistentes supera las doscientas personas que participan siempre en segunda convocatoria, ya que es bien sabido que la mayoría abrumadora de colegiados no participa en tales asambleas.

Que el comunicado 21 de la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO no indica que el Ministerio de Salud cuenta desde el 06 de Noviembre del 2020 con el Lineamiento para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19 “LS-SI-025” pero lo omiten por un interés particular de la Junta Directiva para la no realización de elecciones y prorrogar su nombramiento en un claro acto de ilegalidad- Asimismo muchos Colegios Profesionales de este país han convocado a asambleas para elecciones de forma presencial, en este tiempo de pandemia. Por ejemplo los colegios de Agrónomos, el colegio de periodistas y el colegio de abogados y abogadas.

Que es especial el interés del presidente de la junta directiva en prorrogarse ya que no puede reelegirse en las próximas elecciones por haber sido nombrado por dos ocasiones consecutivas., en el puesto de presidente.

Que a pesar de la pandemia sanitaria que se vive en el país, EL COLEGIO DISPONE del mecanismo electrónico para realizar las elecciones **para elegir y nombrar la nueva junta directiva y el fiscal** del COLEGIO. Que dicha elección y nombramiento es por medios electrónicos, no por Asamblea, sino por elecciones virtuales.

Que la Asamblea General Ordinaria que se realiza posteriormente a las elecciones **no es para nombrar** sino simplemente para ratificar el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano directivo y fiscal del Colegio, lo cual indica que los participantes solo tienen que levantar sus manos(o indicar de alguna otra forma o medio) en una asamblea presencial o virtual, para efectos de **ratificar** los nombramientos realizados durante las elecciones electrónicas.

Que el agremiado al COLEGIO por regla obligatoria es un individuo altamente instruido-con diplomado universitario mínimo en el área de las ciencias económicas- en su mayoría, con experiencia previa en las elecciones virtuales y en uso de medios tecnológicos y capaz de participar en reuniones virtuales, así como participar en reuniones presenciales atendiendo los protocolos sanitarios.

Que el COLEGIO tiene experiencia en realizar reuniones virtuales tanto educativas y sociales. como para recibir nuevos colegiados (incorporaciones) con reuniones que sobrepasan los trescientos participantes.

Que actualmente la tecnología permite realizar reuniones virtuales hasta con mil participantes, lo cual es excesivo considerando la cantidad de personas que participan realmente en las asambleas, en segunda convocatoria. (Ver <https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362823-Organizaci%C3%B3n-de-reuniones-grandes>).

Que EL TRIBUNAL DE ELECCIONES DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA, nombrado previamente por la Junta Directiva, estaba obligado a convocar a elecciones de nueva JUNTA DIRECTIVA y FISCAL, de dicho colegio durante la primera quincena de octubre del año 2021, según lo establece la ley y los reglamentos.

Que dicho TRIBUNAL no realizó dicha convocatoria en el tiempo establecido, sin ninguna justificación, ya que las elecciones son electrónicas siendo imposible la afectación de la salud pública y además porque no existe ninguna ley ni ningún reglamento que respalde la decisión de no llama a elecciones.

Que ni el TRIBUNAL ni la JUNTA DIRECTIVA hicieron ningún intento, ni ningún esfuerzo, ni de realizar las elecciones ni la posterior asamblea general ordinaria para la ratificación de manera virtual o híbrida, entendida como parte presencial y parte electrónica de los nuevos miembros de Junta Directiva y Fiscal, para el periodo 2021-2023, como establece la ley Ley N.º 9866, artículo 3.

Que dicha no convocatoria solo beneficia a los miembros de la JUNTA DIRECTIVA y FISCALIA actual, que se están prorrogando, en aplicación superficial de la Ley N.º 9866 y sus reformas, ya que de manera injustificada o mal motivada o ilegal impide la realización de elecciones para nombrar los órganos ejecutivos y fiscal del colegio.

Que la situación del COLEGIO no cumple con lo establecido por dicha ley N.º 9866 y sus reformas, ya que definitivamente la selección y nombramiento de la junta directiva y del órgano fiscalizador no corresponde a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, sino a un proceso de elecciones que está establecido como electrónico por ley y reglamento. Que tal Asamblea no es para elegir y nombrar en ese acto los miembros de la Junta directiva y el fiscal. como ordena la ley 9866 y sus reformas sino simplemente para ratificarlos. Que además es evidente que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación puede realizarse por medios electrónicos o híbridos , sin que hayan el TRIBUNAL y la JUNTA DIRECTIVA realizado los esfuerzos a que están obligados para convocar y realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ratificación. Que en consecuencia se deduce que el TRIBUNAL ELECCIONES y LA JUNTA DIRECTIVA debieron convocar a elecciones.

Que por la no convocatoria a elecciones se violenta mi derecho constitucional y legal como miembro activo del COLEGIO, y de todos los colegiados a elegir y ser electo como miembro de la JUNTA DIRECTIVA Y DE LA FISCALIA del mismo colegio, por dos años, produciéndose un agravio imposible de reparar por más que pasen los dos años, sin que definitivamente se haya probado que la realización de las elecciones y de la Asamblea General Ordinaria de ratificación puedan afectar la salud pública, como indicó el comunicado 21, que hemos descrito.

Por último y volviendo al principio, es evidente que la Ley N.º 9866 y sus reformas no impide al TRIBUNAL convocar a elecciones y a la JUNTA DRECTIVA saliente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica a convocar a la Asamblea General para la ratificación de los nuevos integrantes de la Junta Directiva y fiscalía, para el periodo 2021-2023. Esto en el tanto los artículos 2 y 3 de la Ley N.º 9866 y sus reformas son claros en establecer que la prórroga prevista en su artículo 1, y las autorizaciones allí previstas, solo aplican en el supuesto de que el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica no haya podido o no pueda realizar aquella Asamblea General Ordinaria que permita el nombramiento de nuevos miembros de Junta Directiva y Fiscal, ya que lo que establece dicha ley N.º 9866 y sus reformas **no les aplica** como argumento legal, ya que lo que se realiza en la Asamblea General

Ordinaria es la ratificación de los nuevos integrantes de Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y su fiscal **y no su nombramiento**, ya que este es derivado de los resultados de un proceso de elecciones que deben realizarse de forma virtual y que no fue convocado de manera ilegal y negligente por el Tribunal y la Junta directiva. En otras palabras que en la Asamblea no hay un proceso de elección y de votación como ocurre en muchas juntas directivas que no se encuentran sujetas al derecho público y en el cual la ley y su reglamento estableció un proceso electoral virtual, como es el caso del COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA.

Por lo tanto, la valoración de los intereses en juego concluye, que al no haber ninguna afectación real a la salud entonces las elecciones deben ser convocadas y una vez efectuadas se debe convocar a Asamblea general ordinaria que puede ser virtual o híbrida(en parte presencial en parte virtual) o incluso presencial si se utiliza un lugar especial de convenciones, en el cual se puedan aplicar los protocolos del Ministerio de Salud.

PRUEBA

PRUEBA DOCUMENTAL

- Impresión de documento denominado electrónicamente Comunicado N.21 de fecha 15.10.2021 emitido por la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas y comunicado por correo electrónico.
- Impresión LS-SI-025, Lineamiento para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19.
- Impresión de Acto de Incorporación de 314 nuevos colegiados en fecha 25.02.2021, evento desarrollado de forma virtual y comunicado por el boletín informativo en fecha 26.2.2021.
- Impresión de Acto de incorporación de 207 nuevos colegiados de forma virtual.
- Impresión de documento Actividades desarrolladas por la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de forma virtual entre otras, tales como: Bingo Virtual de la Solidaridad en fecha 24.7.2021, Rock para Papá en fecha 19.6.2021, Feria Virtual de Empleo en fecha de 3 al 9 de mayo 2021, Baladas para amar en fecha 20 de febrero del 2021, Semana del Emprendimiento del 8 al 12 de marzo 2021.

- Impresión de Comunicados de diferentes Colegios Profesionales de sus Tribunales de Elecciones Internos (véase Colegio de Ingeniero Agrónomos de Costa Rica, Colegio de Abogados y Abogadas) en la realización de procesos electorales para la elección de miembros de Junta Directiva y Fiscalía.
- Publicación Periódico La Nación de fecha 12.10.2021 convocatoria de Asamblea General Ordinaria del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
- Manual DTE Electoral utilizado para el proceso electoral del periodo de elecciones 2019-2021 el cual se desarrolló de forma virtual.
- Ejemplo de credenciales enviadas para el simulacro de votación virtual.
- Oficio CCE-TI-16-2019 emitido por el funcionario Fabian Loaiza Coto encargado de Tecnologías de información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de los resultados de los dos simulacros realizados de previo a las elecciones del periodo 2019-2021 mismo que se desarrolló de forma virtual.
- Boletín Informativo de fecha 21 de noviembre de 2019 donde se presenta el informe del Tribunal de Elecciones el cual contiene el resultado de las votaciones que dieron lugar a la elección de forma virtual de la nueva Junta Directiva y Fiscal del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas para el periodo 2019-2021.
- Oficio **CCECR-JD-P-18-2021** de fecha 15 de abril del 2021 donde el presidente actual del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas donde establece para lo que interesa que el proceso electoral su planificación, organización, ejecución y control corresponde al Tribunal de Elecciones Interno.
- Oficio **CCECR-JD-P-26-2021** de fecha 01 de junio del 2021 donde entre otras cosas planteadas agradece las recomendaciones dadas por un grupo de Colegiados recomendando 12 colegiados para un eventual nombramiento del Tribunal de Elecciones, mismo que potestad de la Junta Directiva.
- Oficio **CCE-TE-002-2021** de fecha 27.9.2021 el cual establece en el punto a-b-c los nombres de los miembros actuales del tribunal de elecciones para el periodo de elecciones 2021-2023 y su competencia conferida por la actual Junta Directa en su nombramiento, así como la aceptación mediante la sesión ordinaria 2832-2021 y 2833-2021 sesión extraordinaria, junto con el detalle de cada uno de los puestos asignados para dicho tribunal.
- Copia en lo conducente de Acta de la Asamblea General Ordinaria 0112-2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, donde se dio una participación de 135 colegiados, con lo cual prueba que es un promedio habitual de participación de colegiados en una asamblea general ordinaria para ratificación.
- Impresión de documento electrónico del Colegio en el que se determina la capacidad del auditorio del COLEGIO.
- Impresión de documento electrónico en el cual se determina que se pueden hacer grandes reuniones por medios electrónicos con 500 a mil participantes.
- Fotocopia del carné de colegiado del suscrito con el cual demuestro mi legitimación

- ORDENESE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO Y AL TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNO EXPEDIENTE QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA EL COMUNICADO 21.

PRUEBA TESTIMONIAL

LLAMESE A DECLARAR A JOSE ALBERTO CARPIO SOLANO, cédula 3-0263-0395, casado, colegiado, vecino de La Guácima de Alajuela, ex fiscal del colegio que dirá todo lo relacionado con el proceso normal de elecciones del colegio y a JORGE GODINEZ FALLAS, cédula 1-0485-0063, casado, colegiado, vecino de Desamparados de San José, para que se refiera a las Asambleas del colegio.

ESTIMACIÓN

Sin estimación por el tipo de proceso.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Evidentemente han sido violentados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40 de La Ley N. 7105, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas con las reformas introducidas con la Ley N.9529 aprobada, los artículos 1, 2,10,12, 19,20,21,22,23,24 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, los artículos 2, 9,11, 39, 41, 90, 91, 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, los artículos 1, 2,3,4, 5,6,7,8,9,10,16,17, 18, 19, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44 y siguientes del Reglamento de Elecciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, artículos1, 7, 11 128, 158, 191 de LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

PRETENSION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

1 – Que se suspenda el acto administrativo por medio del comunicado electrónico número 21 de fecha 15 de octubre de .2021 por parte de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas para tener por prorrogados los nombramientos de la Junta Directiva, Fiscalía según corresponda y se ordene a la Junta directiva y al Tribunal de elecciones a convocar elecciones y la ratificación de nuevos miembros de junta directiva y fiscal a través de la Asamblea General Ordinaria, esta última ya sea de manera virtual, híbrida o presencial.

2- Asimismo, de conformidad con el artículo 23 y 25 y concordantes con del Código Procesal Contencioso Administrativo que con carácter de urgencia se adopte la medida cautelar provisionalísima, ordenando la suspensión de cualquier acto, acuerdo o conducta de la Junta Directiva tendientes a no realizar la convocatoria a

elecciones y realización de la asamblea general ordinaria para la ratificación de nuevos integrantes de Junta directiva y Fiscal para el periodo 2021-2023.

3- Que se ordene a la Junta Directiva y Tribunal de Elecciones la suspensión inmediata de cualquier decisión, acuerdo o medida a futuro que afecte, lesione o pueda afectar los intereses de todos los colegiados debidamente incorporados de elegir y ser electos y proceda a la realización de proceso de elecciones virtual transparente y democrático, así como la convocatoria a la asamblea general ordinaria para la ratificación de nuevos integrantes de Junta directiva y Fiscal del periodo 2021-2023 producto del resultado de la elecciones virtuales.

5- Que se ordene a la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y el Tribunal de Elecciones que respeten los principios constitucionales y derechos humanos fundamentales al sufragio a partir de la organización de un proceso electoral para la elección de nuevos miembros de Junta Directiva Y Fiscal del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica para el periodo 2021-2023.

6-Que ordene a la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Economías de Costa Rica y el Tribunal de Elecciones se abstenga de cualquier acto ilegal que atenten contra la Ley orgánica y reglamentos en la elección de nuevos integrantes de Junta Directiva y fiscal para el periodo 2021-2023.

7- Que se ordene a la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y el Tribunal de Elecciones se abstengan de cualquier acto de ilegalidad que atente contra el derecho fundamental de elegir y ser electo por parte de todos los colegiados que conforman el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.

8- Que se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios y a las costas del presente proceso.

MIS NOTIFICACIONES AL CORREO ELECTRÓNICO
miguelangel2200@hotmail.com.

A los demandados en Mercedes de Montes de Oca de San José, diagonal a la Rotonda La Bandera, edificio con rotulo al frente , de cuatro pisos.

Ruego resolver conforme,

San José, 16 de octubre de 2021

RANDALL SEQUEIRA HERNANDEZ

Lic MIGUEL ANGEL VALVERDE MORA

MASTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO

MASTER EN DERECHO TRIBUTARIO